



A poco tiempo de las elecciones se han perpetrado ataques como este, el 24 de abril, frente al batallón Pichincha, en Cali. FOTO: JUAN P. RUEDA/CEET

Varios de los titulares de las noticias del viernes pasado hacen que el conocido lema de 'Colombia, potencia mundial de la vida' suene contrario a la realidad en un territorio en donde la violencia sigue dejando un rastro de sangre. Los asesinatos de dos soldados, de una mujer trans, de la presidenta del Concejo del municipio de Obando y del joven periodista Mateo Pérez se suman a una lista que solo genera dolor de patria.

Hechos como los señalados seguramente reforzarán en la ciudadanía la creciente preocupación por el deterioro de la seguridad, que viene notándose desde hace meses. La más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría realizada por *Cambio* muestra que el avance de las organizaciones criminales es considerado uno de los tres principales problemas del país, junto con la corrupción y la salud.

Además, mientras la inequidad con estos dos temas disminuyó en abril frente a la medición de marzo, la relacionada con el delito subió en cerca de cinco puntos porcentuales. También lo hizo de forma importante la afirmación sobre la debilidad de la Fuerza Pública para enfrentar un flagelo que no cesa.

Semejante deterioro ocurre mientras en la campaña presidencial las propuestas al respecto despiertan poco entusiasmo entre los especialistas. "Al menos en lo que corresponde a los tres aspirantes que van al frente en los sondeos, los planteamientos no innovan ni consideran las circunstancias actuales", señala Jorge Restrepo, profesor de la Universidad Javeriana y director del Centro de Recursos para Análisis de Conflictos, Cerac.

"Mi impresión es que vamos a ver políticas de seguridad bastante pobres en resultados durante el Gobierno que viene, sin importar quién gane", agrega. Reconoce que el libreto puede cambiar, pero insiste en que los sondeos apuntan a que la inseguridad va a continuar siendo un problema enorme y el crimen organizado se mantendrá en aumento."

Planteamientos que oscilan entre la aplicación de la "mano dura" o insistir en las vías del diálogo son descritos como incompletos ante un desafío que requiere un enfoque integral y articulado por parte de las instituciones. No menos importante resulta entender que este monstruo de mil cabezas se adapta según las circunstancias, por lo cual hay que contar con una buena lectura de la realidad y no quedarse en los relatos del pasado.

Tampoco se puede olvidar que el contexto internacional y regional es distinto ahora, aparte de que existen varias comunidades entre lo que sucede en el territorio colombiano y en otras latitudes. A ello se agrega que la evolución de la tecnología ha abierto nuevos frentes de batalla y hace más complejo seguirles la pista a los enormes flujos de dinero producto de las actividades ilícitas.

Sobra decir que este dolor de cabeza no es exclusivo de Colombia. En Ecuador, Perú, México o Chile, la inseguridad se destaca por ser el problema más grave de todos, por encima de las preocupaciones relacionadas con la economía.

Es conocido que América Latina alberga algo menos del 9 por ciento de la población mundial, pero representa el 30 por ciento de los homicidios intencionales. No obstante, la de las muertes violentas es apenas la manifestación más visible de un tumor difícil de extirpar y que tiene ramificaciones muy profundas en esta parte del mundo.

Otra lectura

Debido a ello, vale la pena destacar los intentos de descifrar el acertijo. Por ejemplo, el jueves pasado en Madrid la Fundación Carolina, que depende del Gobierno español, organizó un seminario concentrado en la región, que incluyó a varios expertos de primera línea en el asunto.

Un tema existencial

Mientras la inseguridad encabeza las preocupaciones de los ciudadanos, tanto en la región como en Colombia, las respuestas efectivas para enfrentar este flagelo brillan por su ausencia.



ANALISTA SÉNIOR

RICARDO ÁVILA - ESPECIAL PARA EL TIEMPO @ravilapinto

Uno de los llamados de atención más relevantes fue el realizado por María Victoria Lorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz, con sede en Bogotá. "Estamos viendo una transformación estructural de la naturaleza del fenómeno criminal, mientras seguimos pensando en carteles, en jerarquías, en organizaciones centralizadas que controlan mercados de principio a fin", afirmó.

Agregó que "hoy nos encontramos frente a algo distinto: ecosistemas criminales mucho más fragmentados, flexibles, adaptativos, con capacidad de aprender, reorganizarse y, sobre todo, de insertarse en los territorios de una manera mucho más sofisticada". Eso se logra "a través de la cooptación, la corrupción o las propias dinámicas de la economía ilícita con las realidades sociales de su entorno".

Aunque las dinámicas locales son particulares, vale la pena señalar que aparecen tendencias mundiales que son determinantes. No hay duda de que la globalización tiene su lado oscuro y aquí se hace presente.

Así lo demuestra el trabajo que hace la Iniciativa Global contra el Crimen Transnacional Organizado, una entidad no gubernamental que opera en 40 países. Parte de esa labor comprende la elaboración de un índice que muestra variaciones importantes en tres mediciones realizadas, siendo la última de finales de 2025.

Como lo explicó en el evento el colombiano Felipe Botero, vinculado a la institución, los hallazgos clave de la edición más reciente fueron varios. Para comenzar, que los mercados de estupefacientes se están transformando y que el crecimiento se concentra en las drogas sintéticas y la cocaína, algo que involucra directamente a Colombia.

Igualmente, los delitos no violentos e invisibles vienen en aumento, sobre todo los financieros y el cibercrimen. En paralelo, los productos falsificados y el contrabando se han expandido, lo cual está relacionado con el auge de las actividades ilícitas ya citadas.

No menos importante es el avance que han tenido los actores privados y extranjeros. La mafia albanesa, por ejemplo, cuenta con operaciones en Perú y Ecuador, donde ha comprado compañías exportadoras de banano que venden la fruta al exterior, en las cuales camufla cargamentos de nar-

cóticos.

La combinación de esas y otras circunstancias hace de Centro y Suramérica las subregiones con mayores problemas de criminalidad en el planeta. Mucho de ello está directamente relacionado con la cocaína, que involucra un elemento que no se ve en otros lugares: el tráfico de armas, explicado por la necesidad de "proteger" zonas de cultivo o instalaciones de refinación por parte de grupos ilegales.

Para colmo de males, esa dinámica perversa arrastra a otras actividades. Así, la trata de personas, el tráfico de migrantes, el comercio ilícito de bienes de consumo o los delitos en contra de la fauna y la flora vienen en franco incremento, de la mano del auge en la minería ilegal.

Ganarles la batalla a los delincuentes se ha vuelto mucho más difícil por diferentes motivos. Pero quizás el más inquietante de todos es el mayor espacio con que cuentan los actores criminales integrados dentro del Estado, lo cual toca a las fuerzas de seguridad, la justicia o los altos funcionarios del Ejecutivo.

Al tiempo que eso sucede, las multinacionales del crimen siguen ganando terreno. Aparte de los albaneses ya mencionados, son notorios los emporios latinoamericanos que van desde el Comando Rojo de Brasil hasta el "Tren de Aragua", que nació en Venezuela, o los carteles mexicanos, para solo mencionar algunos. Estos se apoyan en una especie de subcontratistas que prestan servicios especializados que van desde el transporte de mercancías hasta el sicariato. En el mapa

también están los grupos de tipo mafioso.

Mención aparte merecen las fichas del sector privado que facilitan el lavado de dinero o la transferencia de recursos por debajo del radar de las autoridades. Botero habló de la importancia que estas tienen en Panamá y Uruguay, en Latinoamérica, o en Delaware, en los Estados Unidos, donde la regulación laxa se presta para hacer trampas.

Todo lo anterior, lamentablemente, se combina con un retroceso significativo en el desempeño de los sistemas judiciales, no solo en la lucha contra la impunidad, sino en la lentitud de los procesos. Resulta significativo que, a lo largo y ancho de América Latina, la constante es la sobrepoblación carcelaria que, más que efectividad de la Policía, desnuda la incapacidad para procesar, castigar y resocializar detenidos.

Perspectiva oscura

Tales campanazos de alerta deberían escucharse con más claridad en Colombia, donde las cosas no van bien en esta materia. Como lo subrayó María Victoria Lorente, si bien los datos de homicidios muestran cierta estabilidad que le sirve a la administración Petro para argumentar que la situación está bajo control, las cifras de impactos humanitarios muestran otra dimensión.

"El número de personas afectadas por la violencia durante el 2025, en el territorio nacional, llegó a 1,6 millones de personas, tres veces más que en el año inmediatamente anterior", sostuvo la experta. "Seguimos midiendo capturas, incautaciones, operaciones, mientras lo importante es que se han desarrollado estructuras criminales que en la práctica gobiernan en múltiples puntos de la geografía", añadió.

Quienes responden que lugares apartados esa ha sido la norma desde hace rato ignoran otro elemento. "Hay una conexión cada vez más estrecha entre lo urbano y lo rural en las dinámicas del crimen organizado, pues son eslabones de una misma cadena", dijo Lorente.

Cuando ocurren episodios que sacuden a la opinión, vuelven los llamados a la mano dura. El ejemplo de Nayib Bukele en El Salvador, al reducir a cerca del dos por ciento de la población masculina en centros penitenciarios, ha tratado de serimitado en otras naciones latinoamericanas.

Sin embargo, la respuesta punitiva puede traer complicaciones en el mediano y largo plazo. Desde el punto de vista de la democracia, el autoritarismo es un aumento en el autoritarismo y un reemplazo de las medidas de hecho por el debido proceso.

Además, construir más prisiones para encerrar gente acaba incubando otro tipo de flujos. Para citar un caso concreto, las grandes multilaterales del crimen que actúan hoy en día tuvieron su origen en las cárceles, donde las estructuras criminales normalmente imponen su ley en los patios en los cuales se instruye a nuevos y viejos cuadros.

De ahí que los especialistas insistan en que se requiere un enfoque diferente. Felipe Botero habla de sanciones a integrantes clave de las estructuras de linde, algo que debe ir más allá de los cabecillas e incluir contadores o abogados. Así mismo, insiste en la persecución de los flujos financieros ilícitos, el aumento de las labores de inteligencia y una reforma carcelaria que acabe con las llamadas universidades del crimen.

Por su parte, María Victoria Lorente plantea varias ideas: pasar de capturar más a detener mejor, golpear las rentas y no solo las estructuras, recuperar la gobernanza territorial del Estado, fortalecer las capacidades locales, atacar la corrupción y repensar la cooperación internacional. Moverse en esa dirección obliga a que las políticas de seguridad o contra las drogas, para solo nombrar un par, estén coordinadas y vayan en la misma dirección.

Nada de eso, tristemente, ha ocurrido en Colombia en los últimos años, donde el desorden administrativo y la captura institucional por parte de los tramos parecen ir en aumento. Las denuncias que ahora involucran a antiguas joyas de la corona del patrimonio público, como es el caso de Ecopetrol, sugieren que los tentáculos mafiosos se siguen extendiendo en aras de intereses particulares, mientras la probidad y el bien común se olvidan por completo.

Debido a ello, quien asuma el poder el próximo 7 de agosto debería llegar con una estrategia completa que involucre tanto liderazgo como medidas de choque y estrategias de corto, mediano y largo plazo. Resulta inquietante, por ahora, que tal esfuerzo no se vea, mientras lo que más aparece son las fórmulas frías y nocturnas de los lugares comunes.

Si eso no cambia, la perspectiva se vuelve preocupante e incluirá más muertes absurdas y peor calidad de vida para los ciudadanos, mientras Colombia se enfrenta a un verdadero dilema existencial: el de ser un país viable o un territorio donde los criminales ganarán más espacio. Por eso, la preocupación respecto a la seguridad tiene fundamentos y demanda respuestas efectivas más temprano que tarde.

Quien asuma el poder el próximo 7 de agosto debería llegar con una estrategia completa que involucre tanto liderazgo como medidas de choque y estrategias de corto, mediano y largo plazo.